
Lic. Miguel Alejandro Alonso Reyes
Gobernador del Estado

**C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA H. LX LEGISLATURA DEL ESTADO**

MIGUEL ALEJANDRO ALONSO REYES, Gobernador del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, en ejercicio de la facultad que me confiere la fracción II del artículo 60 de la Constitución Política del Estado, vengo a promover ante esa H. Legislatura, INICIATIVA POR LA QUE SE EXPIDE LA LEY DE EXTINCIÓN DE DOMINIO DEL ESTADO DE ZACATECAS Y SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE ZACATECAS.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Gobierno del Estado de Zacatecas mediante la creación, y mejoramiento de herramientas legales que permitan a las instituciones de procuración de justicia llevar a cabo acciones contundentes para hacer frente a las actividades de la delincuencia organizada y delitos de naturaleza similar, se suma al proceso de renovación y fortalecimiento del marco jurídico del Estado Mexicano.

Uno de los incentivos de la actividad criminal consiste en que las autoridades se encuentran imposibilitadas para acreditar la procedencia ilícita de diversos bienes utilizados para la comisión de delitos, así como su relación directa con los imputados en un proceso penal, aún cuando existan elementos suficientes para establecer un vínculo con la delincuencia. De tal suerte, que los grupos criminales logran evadir el decomiso de esos recursos mal habidos, generando con esto impunidad.

El Estado Mexicano ha suscrito diversos instrumentos internacionales tales como la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas y la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, en las que se determina la obligación de los Estados Parte de instrumentar procedimientos encaminados a la privación, con carácter definitivo, de algún bien de origen ilícito por decisión de un tribunal o de una autoridad competente, así como considerar la posibilidad de revertir la carga de la prueba respecto del origen lícito de dichos bienes, en la medida en que ello sea compatible con los principios del derecho interno.

Las recientes reformas al Artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, contemplan una nueva herramienta que permite al Estado aplicar a su favor bienes respecto de los cuales existan datos para acreditar que son instrumento, objeto o producto de actividades de la delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, robo de vehículos y trata de personas o que estén destinados a ocultar o mezclar bienes producto de tales delitos. Dicha herramienta es la Extinción de Dominio.

La Extinción de Dominio es la pérdida total o parcial de los derechos de propiedad sobre los bienes a los que se refiera la sentencia que la decreta sin contraprestación ni compensación alguna para el demandado o demandados, cuando se trata de los delitos antes referidos, respecto de los siguientes bienes:

- Aquellos que sean instrumento, objeto o producto del delito, aún cuando no se haya dictado la sentencia que determine la responsabilidad penal, pero existan elementos suficientes para determinar que el hecho ilícito sucedió.
- Aquellos que no sean instrumento, objeto o producto del delito, pero que hayan sido utilizados o destinados a ocultar o mezclar bienes producto del delito, siempre y cuando se reúnan los extremos del inciso anterior.
- Aquellos que estén siendo utilizados para la comisión de delitos por un tercero, si su dueño tuvo conocimiento de ello y no lo notificó a la autoridad o hizo algo para impedirlo.
- Aquellos que estén intitulados a nombre de terceros, pero existan suficientes elementos para determinar que son producto de delitos patrimoniales o de delincuencia organizada.

La extinción de dominio, a diferencia del decomiso y la aplicación a favor del Estado de bienes decretada para el pago de multas o impuestos, asegurados que causen abandono, o para el pago de responsabilidad civil derivada de la comisión de un delito; es sin contraprestación alguna y autónoma del proceso penal.

Por lo anterior se propone la expedición de la Ley de Extinción de Dominio para el Estado de Zacatecas, como un instrumento que permita la reducción de la base económica de la delincuencia a través de la pérdida de derechos de propiedad o posesión de los bienes que son instrumento, objeto o producto de actividades de delincuencia organizada, secuestro, robo de vehículo trata de personas o que estén destinados a ocultar o mezclar bienes producto de tales delitos, sin contraprestación ni compensación alguna para el afectado, cuando no logre probar, a través de medios idóneos, la procedencia lícita de dichos bienes, su actuación de buena fe, así como que estaba impedido para conocer su utilización ilícita.

ESTRUCTURA LÓGICO JURÍDICA.

La ley que se propone consta de 84 artículos ordinarios distribuidos en cinco Títulos, el Primero relativo a Disposiciones Generales, el Segundo a la Acción de Extinción de Dominio, éste con un Capítulo sobre presupuestos procesales, otro sobre el ejercicio de la acción, uno mas sobre la preparación de la acción, el relativo a medidas cautelares, el de las partes, el del procedimiento, las pruebas, la sentencia, las notificaciones, las nulidades, los incidentes y recursos, y el último relativo a las garantías y derechos de los afectados, terceros, víctimas y ofendidos.

El Título Tercero, relativo a la Administración de los Bienes consta de dos Capítulos, el Primero sobre la administración de los bienes muebles y el Segundo sobre la administración de los bienes inmuebles.

El Título Cuarto se refiere a la colaboración, mientras que el Título Quinto contiene las disposiciones relativas a la prevención del uso ilícito de los bienes.

En el articulado antes descrito, se establece que la acción de Extinción de Dominio será de naturaleza jurisdiccional, de carácter real y de contenido patrimonial, y procederá sobre cualquier derecho real, principal o accesorio, independientemente de quien los tenga en su poder, o los haya adquirido.

La acción de Extinción de Dominio que se propone será autónoma, distinta e independiente de cualquier otra de naturaleza penal que se haya iniciado simultáneamente, de la que se haya desprendido, o en la que tuviera origen, sin perjuicio de los terceros de buena fe exentos de culpa.

A efecto de combatir la práctica común entre los integrantes de la delincuencia organizada de tener prestanombres o testaferros para encubrir el origen ilícito de los bienes, así como la mezcla de bienes lícitos e ilícitos para ocultar su procedencia se consideran:

- Aquellos que hayan sido utilizados o destinados a ocultar o mezclar su producto.
- Los que estén siendo utilizados para la comisión de delitos por un tercero, si su dueño tuvo conocimiento y no lo notificó a la autoridad o hizo algo para impedirlo .
- Los que estén a nombre de terceros, pero que existan suficientes elementos para determinar que son producto de los delitos señalados anteriormente y el acusado por estos delitos se comporte como dueño.

Lo que se busca es proporcionar a las instituciones de Seguridad Pública, Procuración y Administración de Justicia un instrumento legal para combatir de

manera frontal y directa a las organizaciones delictivas al afectar directamente a la economía del crimen, aumentando sus costos y reduciendo sus ganancias. Para cumplir con las garantías de audiencia y debido proceso, se propone que se permita al afectado y terceros presentar pruebas e intervenir en su preparación y desahogo, así como oponer las excepciones y defensas que estimen convenientes respecto de los bienes materia de la acción y se garantice la debida intervención en el procedimiento de personas en situación de vulnerabilidad tales como los que pertenecen a grupos étnicos indígenas, personas con discapacidad, adultos mayores, entre otros.

La iniciativa de Ley de Extinción de Dominio, también propone la posibilidad de que el Agente del Ministerio Público pueda determinar, o solicitar al Juez, medidas cautelares para evitar que puedan sufrir menoscabo, extravío o destrucción, que sean ocultados o mezclados, o se realice cualquier acto traslativo de dominio, sobre cualquier bien materia del procedimiento. Las medidas podrán consistir en:

- La prohibición para enajenarlos o gravarlos;
- La suspensión del ejercicio de dominio;
- La suspensión del poder de disposición;
- Su retención;
- Su aseguramiento;
- El embargo de bienes, dinero en depósito en el sistema financiero, títulos valor y sus rendimientos, lo mismo que la orden de no pagarlos cuando fuere imposible su aprehensión física; o
- Las demás que considere necesarias, siempre y cuando funde y motive su procedencia.

Los bienes que sean materia de medidas cautelares estarán bajo el depósito de la Oficialía Mayor si se trata de bienes inmuebles y de la Secretaría de Finanzas en los demás casos. Además de que se contempla dotar de atribuciones a ambas dependencias para que lleven a cabo todas las actividades necesarias para proteger y administrar los bienes.

El diseño del procedimiento de extinción de dominio será ágil y expedito en relación con la tramitación de un procedimiento del orden penal. Lo anterior, en virtud de que prevé para que todo aquél que se considere afectado por la acción de extinción de dominio puedan comparecer a juicio y tengan la posibilidad de acreditar con toda oportunidad su interés jurídico sobre los bienes materia de dicha acción, alegue lo que a su derecho convenga ante la posible privación de los bienes con carácter definitivo, declarada mediante sentencia judicial.

Con la finalidad de realizar un eficaz ejercicio de la acción y desarrollo del proceso de extinción de dominio se propone la creación de una Comisión Técnica Consultiva integrada por representantes de las diversas Áreas de la Procuraduría General de Justicia del Estado, misma tendrá como objetivos, entre otros, emitir su opinión respecto del ejercicio de la acción de extinción de dominio, así como asesorar al Procurador General de Justicia en las consultas sobre la acción, improcedencia y desistimiento que le formulen los Agentes del Ministerio Público, entre otras.

Es de resaltar que en la presente iniciativa se propone que respecto de los bienes señalados en el inciso c) de la fracción II del Artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Juez que conozca de la acción podrá decretar la aplicación de la extinción de dominio del 10 al 50 por ciento del bien o bienes sobre los que pronuncia sentencia, cuando el dueño haya actuado con culpa leve o culpa media, y del 50 al 100 por ciento cuando haya actuado con culpa grave o negligencia inexcusable. Así mismo se estipula que se deberá valorar las calidades de la persona, modalidades de la contratación, monto del beneficio, lucro, daño gravedad del delito y las medidas preventivas que se hayan llevado a cabo para evitar la utilización del bien con programas de prevención.

Lo anterior basado a la teoría civil relativa a la culpa, entendiéndose ésta como la falta de observación, atención, cuidado o vigilancia bien sea en la ejecución de un contrato o cualquier otro acto jurídico en la que intervengan particulares sin que exista ligamen contractual.

En este sentido se considera necesario incluir un capítulo que obligue al Estado de Zacatecas realizar acciones de prevención en el uso lícito de los bienes, a través de sus dependencias y órganos estatales de los alcances, consecuencias y previsiones de la aplicación de la Ley de Extinción de Dominio, mediante un programa de difusión permanente, manuales, instructivos y procedimientos así como instrumentos de autorregulación, para que la población pueda llevar a cabo las medidas de prevención y verificación que sean necesarias.

Por otra parte y con el fin de transparentar y rendir cuentas claras del manejo de los bienes y recursos derivados de los procedimientos de extinción de dominio, se prevé la existencia de una Coordinación Técnica que tendrá la finalidad de asesorar a la Secretaría de Finanzas del Estado sobre la forma en que se administren los bienes.

La Coordinación Técnica estará conformada por la Secretaría de Finanzas, la Procuraduría General de Justicia, la Secretaría de Seguridad Pública, la Oficialía Mayor y la Contraloría General, todas ellas del Estado de Zacatecas.

Por lo anterior, se somete a la consideración de esa H. Legislatura del Estado la siguiente:

**INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE
EXPIDE LA LEY DE EXTINCIÓN DE DOMINIO DEL ESTADO DE
ZACATECAS Y SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY
ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE ZACATECAS.**

ARTÍCULO PRIMERO.- Se expide la **Ley de Extinción de Dominio del Estado de Zacatecas**, para quedar:

LEY DE EXTINCIÓN DE DOMINIO DEL ESTADO DE ZACATECAS

**TITULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
CAPÍTULO ÚNICO**

ARTÍCULO 1. La presente Ley es de orden público, interés social y de observancia obligatoria y tiene por objeto regular la instauración del procedimiento de Extinción de Dominio de bienes a favor del Estado, la actuación de las autoridades competentes, los efectos de la resolución que se emita y los medios para la intervención de terceros que se consideren afectados; previsto en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

ARTÍCULO 2. Para los efectos de la presente Ley, se entenderá por:

I. Acción: Acción de Extinción de Dominio;

II. Afectado: Persona titular de los derechos de propiedad del bien sujeto al Procedimiento de Extinción de Dominio, con legitimación para acudir a proceso;

III. Bienes: Todos las cosas muebles, inmuebles, que puedan ser objeto de apropiación que no estén excluidos del comercio, y que actualicen los supuestos señalados en el artículo 6 de esta Ley.

IV. Comisión: Comisión Técnica Consultiva;

V. Coordinación: Coordinación Técnica;

VI. Hecho Ilícito: Hecho, típico y antijurídico, constitutivo de cualquiera de los delitos de delincuencia organizada, secuestro, secuestro exprés, robo de vehículos y trata de personas; aun cuando no se haya determinado quién o quiénes fueron sus autores, participaron en él o el grado de su intervención;

VII. Juez: Juez del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas competente para conocer de la acción de Extinción de Dominio, del proceso correspondiente y de sus consecuencias;

VIII.- Mezcla de bienes. Suma o aplicación de dos o más bienes, lícitos e ilícitos pertenecientes a una o más personas;

IX.- Ministerio Público: Agente del Ministerio Público encargado de la acción de Extinción de Dominio, de su seguimiento en juicio y sus consecuencias.

X.- Ley: Ley de Extinción de Dominio para el estado de Zacatecas

XI.- Procedimiento: Procedimiento de Extinción de Dominio previsto en esta Ley;

XII.- Procuraduría: Procuraduría General de Justicia del Estado de Zacatecas.

XIII.- Tercero: Persona que, sin ser afectado en el procedimiento de Extinción de Dominio, comparece en él para deducir un derecho propio sobre los bienes materia de la acción;

XIV.- Víctima u ofendido. Titular del bien jurídico lesionado o puesto en peligro con la ejecución del hecho ilícito que fue sustento para el ejercicio de la acción de Extinción de Dominio, la persona que sufrió daño, perjuicio o afectación como consecuencia de dichos hechos.

ARTÍCULO 3. En los casos no previstos en esta ley, se estará a las siguientes reglas de supletoriedad:

I. En la preparación del ejercicio de la Acción de Extinción de Dominio, a lo previsto en el Código de Procedimientos Penales para el Estado de Zacatecas;

II. En el Procedimiento de Extinción de Dominio, a lo previsto en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Zacatecas,

III. En cuanto a los delitos, a lo previsto en el Código Penal para el Estado de Zacatecas; y a la Ley de Delincuencia Organizada del Estado de Zacatecas.

IV. En los aspectos relativos la regulación de bienes u obligaciones, a lo previsto en el Código Civil para el Estado de Zacatecas.

ARTÍCULO 4. Durante el procedimiento, el Juez deberá dictar de oficio las providencias encaminadas a que la justicia sea pronta y expedita.

Para este fin, las partes podrán solicitar la orientación del Juez sobre el procedimiento que ante éste se desarrolla, como cómputos, plazos y circunstancias para la promoción y el desahogo de pruebas, y otras cuestiones que aseguren, con plena información para los participantes, la debida marcha del procedimiento, sin abordar cuestiones de fondo que la autoridad judicial deba resolver en los autos o en la sentencia. La información la dará el Juez en audiencia pública con la presencia de las partes.

El Juez rechazará de plano, los recursos o promociones notoriamente frívolos o improcedentes, fundada y motivada su resolución se notificará 24 horas después de dictada.

El Juez podrá imponer correcciones disciplinarias o medidas de apremio, en los términos del ordenamiento supletorio correspondiente.

TITULO II DE LA ACCIÓN DE EXTINCIÓN DE DOMINIO

CAPITULO I PRESUPUESTOS PROCESALES

ARTÍCULO 5. La Extinción de Dominio es la pérdida total o parcial de los derechos de propiedad sobre los bienes a los que se refiera la sentencia que la decreta sin contraprestación ni compensación alguna para el demandado o demandados, cuando en tratándose de los delitos de delincuencia organizada, secuestro, secuestro exprés, robo de vehículos, y trata de personas, estos bienes sean alguno o algunos de los que relaciona el artículo 6 de esta Ley.

La Extinción de Dominio es de naturaleza jurisdiccional, de carácter real y de contenido patrimonial, y procederá sobre cualquier derecho que se tenga sobre los bienes, aún los de carácter personal, independientemente de quien los tenga en su poder, o los haya adquirido.

La acción es autónoma, distinta e independiente de cualquier otra de naturaleza penal que se haya iniciado simultáneamente, de la que se haya desprendido, o en la que tuviera origen, sin perjuicio de los derechos de terceros de buena fe.

La Extinción de Dominio no procederá sobre bienes decomisados por la autoridad judicial en sentencia ejecutoriada.

Los bienes sobre los que se declare la Extinción de Dominio se aplicarán a favor del Gobierno del Estado de Zacatecas y serán destinados a programas de prevención social del delito.

ARTÍCULO 6. Se determinará procedente la Extinción de Dominio, previa declaración jurisdiccional, respecto de los bienes siguientes:

I. Aquellos que sean instrumento, objeto o producto del delito, aun cuando no se haya dictado la sentencia que determine la responsabilidad penal, pero existan elementos suficientes para determinar que el hecho ilícito sucedió.

II. Aquellos que no sean instrumento, objeto o producto del delito, pero que hayan sido utilizados o destinados a ocultar o mezclar bienes producto del delito, siempre y cuando se reúnan los extremos de la fracción anterior.

Se entenderá por ocultar, la acción de esconder, disimular o transformar bienes que son producto del delito y por mezcla de bienes, la suma o aplicación de dos o más bienes.

III. Aquellos que estén siendo utilizados para la comisión de delitos por un tercero, si su dueño tuvo conocimiento de ello y no lo notificó a la autoridad o hizo algo para impedirlo.

IV. Aquellos que estén intitulados a nombre de terceros, pero existan suficientes elementos para determinar que son producto de delitos patrimoniales o de delincuencia organizada, y el acusado por estos delitos se comporte como dueño.

El supuesto previsto en la fracción III será aplicable cuando el Agente del Ministerio Público acredite que el tercero utilizó el bien para cometer los delitos de delincuencia organizada, secuestro, secuestro exprés, trata de personas o robo de vehículos y que el dueño tenía conocimiento de esa circunstancia.

ARTÍCULO 7. La absolución del afectado en el proceso penal o la no aplicación de la pena de decomiso de bienes, no prejuzga respecto de la legitimidad de ningún bien.

ARTÍCULO 8. También procederá la acción respecto de los bienes objeto de sucesión hereditaria, cuando dichos bienes sean de los descritos en el artículo 6 de esta Ley, independientemente de la etapa del procedimiento civil en el que se encuentren.

ARTÍCULO 9. Se restituirán a la víctima u ofendido del delito los bienes de su propiedad que sean materia de la acción, cuando acredite dicha circunstancia en el procedimiento previsto en esta Ley.

El derecho a la reparación del daño, para la víctima u ofendido del delito, será procedente de conformidad con la legislación vigente, cuando obren suficientes medios de prueba en el Procedimiento y no se haya dictado sentencia ejecutoriada al respecto.

Cuando la víctima u ofendido obtengan la reparación total del daño en el procedimiento de Extinción de Dominio, no podrán solicitarlo por ninguna de las otras vías, que para tal efecto establecen las leyes aplicables. En caso de reparación parcial quedaran expeditos sus derechos para usar otras vías apropiadas.

ARTÍCULO 10. Cuando los bienes materia de la acción, después de ser identificados, no pudieran localizarse o se presente alguna circunstancia que impida la declaratoria de Extinción de Dominio, se procederá conforme a las reglas siguientes:

I. Cuando los bienes se hayan transformado o convertido en otros bienes, sobre estos se hará la declaratoria; o

II. Cuando se hayan mezclado con bienes adquiridos lícitamente, estos podrán ser objeto de la declaratoria de Extinción de Dominio hasta el valor estimado del producto entremezclado. Lo anterior siempre respetando el derecho de propiedad de terceros ajenos al proceso.

ARTÍCULO 11. No se podrá disponer de los bienes sujetos a la acción hasta que exista una sentencia ejecutoriada que haya declarado la Extinción de Dominio.

Si la sentencia fuere absolutoria, los bienes y sus productos se reintegrarán al propietario.

ARTÍCULO 12. El ejercicio de la acción de Extinción de Dominio no excluye que el Ministerio Público solicite el decomiso de los mismos bienes con motivo del ejercicio de la acción penal, en los casos que resulte procedente.

ARTÍCULO 13. El Poder Judicial del Estado contará con los jueces civiles competentes para conocer de las acciones de Extinción de Dominio del desarrollo de los procesos correspondientes y de sus consecuencias, que estime necesarios.

CAPÍTULO II DEL EJERCICIO DE LA ACCIÓN

ARTÍCULO 14. La Procuraduría conformará una Comisión Técnica Consultiva para la Extinción de Dominio, la que estará integrada por un representante de:

- I. La Subprocuraduría de Investigaciones;
- II. La Subprocuraduría de Procedimientos Jurisdiccionales;
- III. La Unidad Especializada en Investigación de la Delincuencia Organizada; y de la
- IV. La Unidad de Investigación Patrimonial de la Delincuencia Organizada.

La Comisión tendrá como objetivos, entre otros, emitir su opinión respecto del ejercicio de la acción de Extinción de Dominio, así como asesorar al Procurador General de Justicia en las consultas sobre la acción, improcedencia y desistimiento que le formulen los Agentes del Ministerio Público, así como las demás relativas al tema de la Extinción de Dominio.

La Comisión será presidida por la Subprocuraduría de Investigaciones y funcionará de conformidad con el Manual de Operación que emita el Procurador.

Los representantes deberán contar con nivel mínimo de Director de Área.

Los integrantes señalados en las fracciones I y II tomarán las decisiones de la Comisión, escuchando la opinión de los señalados en las fracciones III y IV, quienes tendrán funciones de asesoría.

CAPITULO III DE LA PREPARACIÓN DE LA ACCIÓN

ARTÍCULO 14. La Acción de Extinción de Dominio se formulará mediante demanda del Agente del Ministerio Público, previo acuerdo del Procurador General de Justicia del Estado, quién tomará en consideración la opinión de la Comisión Técnica Consultiva para la Extinción de Dominio.

A la Acción de Extinción de Dominio se le aplicarán las reglas de prescripción aplicables a los delitos señalados por el artículo 6 de esta Ley.

En los casos en que el Agente del Ministerio Público determine la improcedencia de la acción, deberá emitir una resolución fundada y motivada.

El Agente del Ministerio Público podrá desistirse de la Acción de Extinción de Dominio en cualquier momento, antes de que se dicte la sentencia, previo acuerdo del Procurador General de Justicia del Estado, quién tomará en consideración la opinión de la Comisión Técnica Consultiva para la Extinción de Dominio, debiendo exponer por escrito las circunstancias que lo motivaren a hacerlo, documento que deberá obrar en el expediente particular que integre el Ministerio Público. También podrá desistirse de la pretensión respecto de ciertos bienes objeto de la Acción de Extinción de Dominio, siguiendo el procedimiento señalado.

Artículo 15. Se considerará que existe causal de desistimiento cuando:

I. En su caso, se demuestre la procedencia lícita de los bienes; la actuación de buena fe de su propietario o poseedor, así como que estaba impedido para conocer de la utilización ilícita de los bienes; o

II. De los medios de prueba recabados no se acredite que los bienes se encuentran en alguno de los supuestos previstos en el artículo 6 de la Ley.

ARTÍCULO 16. Cuando se haya iniciado una investigación de delitos, durante la substanciación de un proceso penal o cuando se dicte sentencia penal respecto de los delitos previstos en el Artículo 5 de esta Ley y sean identificados, detectados o localizados algunos de los bienes a que se refiere el Artículo 6 de este ordenamiento, el Agente del Ministerio Público que esté conociendo del asunto, remitirá copia certificada de las diligencias conducentes al Agente del Ministerio Público que se encargará de ejercitar la acción de Extinción de Dominio.

ARTÍCULO 17. El Agente del Ministerio Público preparará y ejercerá la acción ante el Juez y para ese efecto, tendrá las siguientes atribuciones:

I. Recabará, recibirá y practicará las diligencias que considere necesarias para obtener las pruebas que acrediten cualquiera de los hechos constitutivos de delito a que se refiere el Artículo 5 de la presente Ley;

II. Recabará los medios de prueba que acrediten indiciariamente que los bienes se encuentran en alguno de los supuestos previstos en el Artículo 6 de esta Ley;

III. Asegurar y en su caso administrar como depositario los bienes materia de la acción, cuando exista peligro de menoscabo, pérdida, sustracción o destrucción, debiendo solicitar en un término no mayor de tres horas, contados a partir del aseguramiento, la medida cautelar al juez.

IV. Solicitará al juez, durante el procedimiento respectivo, las medidas cautelares previstas en la presente ley; y

V. Requerir información o documentación del Sistema Financiero por conducto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas o la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro del Instituto del Registro Público de la Propiedad, de la Secretaría de Obras Públicas del Estado y de los Catastros Municipales, así como información financiera o fiscal al Sistema de Administración Tributaria u otras autoridades competentes en materia fiscal. Los requerimientos de información se formularán por el Procurador General de Justicia del Estado de Zacatecas, por los subprocuradores a quienes delegue esta facultad o por la Unidad de Investigación Patrimonial de la Delincuencia Organizada;

VI.- Requerir información y documentación a los Registros Públicos de la Propiedad, tesorerías locales, catastros y archivos de notarías y a las demás autoridades competentes; y

VII.- Las demás que señale esta Ley, la legislación vigente o que considere necesarias para el cumplimiento del objeto de este ordenamiento

El Ministerio Público podrá ejercer las atribuciones anteriores actuando en el expediente que al efecto genere, sin perjuicio de las actuaciones que realice en la investigación del delito de que se trate.

El Ministerio Público podrá acordar el aseguramiento de bienes e instrumentos correspondientes para preservar la materia de la acción de Extinción de Dominio, en cualquier momento en que tenga conocimiento de que va a celebrarse o se está celebrando cualquier acto jurídico que tenga por objeto alguno de los bienes señalados en el Artículo 6 de la presente Ley.

ARTÍCULO 18. El ejercicio de la acción de Extinción de Dominio se sustentará en las actuaciones conducentes del Ministerio Público o, en su caso, del procedimiento o proceso penal por los hechos ilícitos a que se refiere el Artículo 5 de esta Ley, cuando de la investigación realizada por el Ministerio Público se desprenda que el hecho ilícito sucedió y que los bienes se ubican en los supuestos del Artículo 6 de esta Ley. El Ministerio Público podrá ejercitar la acción de Extinción de Dominio cuando reúna los elementos y supuestos referidos.

ARTÍCULO 19. Recibidas las copias certificadas de las constancias ministeriales, los autos del proceso penal o la sentencia penal, el Agente del Ministerio Público de inmediato realizará todas las diligencias necesarias para preparar la acción y procederá a complementar o, en su caso, recabar la información necesaria para la identificación de los bienes materia de la acción. Si los bienes se encuentran a disposición de alguna otra autoridad, le informará al respecto.

El Agente del Ministerio Público realizará el inventario de los bienes, cuando no exista constancia de su realización, y determinará las medidas cautelares necesarias previstas en el Capítulo VI del presente Título. Para la etapa de preparación de la acción, el Agente del Ministerio Público contará con el plazo que no exceda el término de la prescripción, contado a partir de la recepción de las constancias.

CAPÍTULO IV MEDIDAS CAUTELARES

ARTÍCULO 20. El Agente del Ministerio Público solicitará al Juez las medidas cautelares que considere procedentes a fin de evitar que los bienes materia de la Acción de Extinción de Dominio, puedan sufrir menoscabo, extravío o destrucción; que sean ocultados o mezclados; o se realicen actos de traslado de dominio sobre el mismo. El Juez deberá resolver en un plazo no mayor a 24 horas naturales a partir de la recepción de la solicitud.

Las medidas cautelares podrán consistir en:

I.- La prohibición para enajenarlos o gravarlos;

II.- La suspensión del ejercicio de dominio;

III.- La suspensión del poder de disposición, en cuyo caso, el agente del Ministerio Público podrá solicitar al Juez medidas urgentes que podrán consistir en:

I. Clausura de establecimientos comerciales;

II. Colocación de sellos en puertas y ventanas de inmuebles, y en su caso, cerrarlas con llave;

III. Mandar inventariar los bienes susceptibles de ocultarse o perderse;

IV. Mandar depositar el dinero y alhajas en el establecimiento autorizado por la ley; y/o

V. Herrar ganado.

IV.- Su retención;

V.- Su aseguramiento;

VI.- Rompimiento de cerraduras y el uso de la fuerza pública;

VII.- El embargo de bienes; dinero en depósito en el sistema financiero; títulos valor y sus rendimientos, lo mismo que la orden de no pagarlos cuando fuere imposible su aprehensión física; o

VIII.- Las demás que considere necesarias, siempre y cuando funde y motive su procedencia, o aquellas contenidas en la legislación vigente.

ARTÍCULO 21. Iniciada la Acción de Extinción de Dominio, el Juez, a petición del Agente del Ministerio Público o de oficio, podrá acordar las medidas cautelares señaladas en el artículo anterior, en el auto admisorio de la demanda o en cualquier etapa del procedimiento.

ARTÍCULO 22. Tratándose de bienes inmuebles, las medidas cautelares, dictadas por el Juez, se inscribirán en el Registro Público de la Propiedad que corresponda y no podrá verificarse en dicho bien ningún embargo, toma de posesión, diligencia precautoria o cualquier otra que entorpezca el curso del juicio, sino en virtud de sentencia ejecutoriada relativa al mismo bien, debidamente registrada y anterior en fecha a la inscripción de la referida demanda o en razón de providencia precautoria solicitada ante el Juez por acreedor con mejor derecho, en fecha anterior a la de inscripción de la demanda.

El demandado o afectado por la medida cautelar no podrá transmitir la posesión, enajenar ni gravar los bienes o constituir cualquier derecho sobre ellos, durante el tiempo que dure aquella, ni permitir que un tercero lo haga.

Los bienes asegurados no serán transmisibles por herencia o legado durante la vigencia de esta medida.

ARTÍCULO 23. Cuando los bienes objeto de la medida cautelar impuesta hayan sido previamente intervenidos, secuestrados, embargados o asegurados en procedimientos judiciales o administrativos distintos de la investigación que haya motivado la Acción de Extinción de Dominio, se notificará la nueva medida a las autoridades que hayan ordenado dichos actos, así como al

Registro Público de la Propiedad correspondiente. Los bienes podrán continuar en custodia de quien se hubiere designado en el procedimiento judicial o administrativo anterior y a disposición de la autoridad competente.

En caso de que las medidas a que se refiere el párrafo anterior sean levantadas, subsistirá la medida cautelar que haya impuesto el Juez de Extinción de Dominio.

ARTÍCULO 24. Las medidas cautelares obligan a los propietarios, poseedores, quienes se ostenten como dueños, depositarios, interventores, administradores, albaceas o cualquier otro que tenga algún derecho sobre dichos bienes.

Las medidas cautelares no implican modificación alguna a los gravámenes existentes sobre los bienes.

ARTÍCULO 25. Mientras los recursos en numerario o títulos financieros de valores se encuentren sujetos a medidas cautelares, el Juez ordenará su depósito bajo responsabilidad de la Dirección de Administración de la Procuraduría.

ARTÍCULO 26. Durante la sustanciación del procedimiento, se podrá solicitar la ampliación de medidas cautelares respecto de los bienes sobre los que se haya ejercitado acción de Extinción de Dominio. También se podrán solicitar medidas cautelares con relación a otros bienes sobre los que no se hayan solicitado en un principio, pero que deban formar parte del procedimiento.

La ampliación de las medidas cautelares sólo será posible antes de acordar el cierre de la instrucción.

ARTÍCULO 27. El demandado o tercero afectado no podrá ofrecer garantía para obtener el levantamiento de la medida cautelar. Contra el auto que ordene el aseguramiento o embargo precautorio de bienes es procedente el recurso de apelación que se admitirá solo en el efecto devolutivo conforme al Artículo 374 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Zacatecas.

ARTÍCULO 28. El depósito de los bienes objeto de las medidas cautelares a que se refiere esta Ley, recaerá en la Dirección de Administración de la Procuraduría.

ARTÍCULO 29. Cuando el Juez dicte medidas cautelares, el Agente del Ministerio Público ordenará a sus auxiliares o a los organismos de gobierno la realización las acciones que considere necesarias para cumplir con las medidas decretadas.

CAPÍTULO V DE LAS PARTES

ARTÍCULO 30. Son parte en el procedimiento de Extinción de Dominio:

I.-El actor, que será el Ministerio Público. La acción de Extinción de Dominio podrá ser ejercitada por un agente del Ministerio Público distinto del que tenga a su cargo la integración de la investigación o la intervención en el proceso penal del delito de que se trate;

II.- El demandado, que será el dueño del bien de que se trate, quien se ostente o comporte como tal, o ambos, y

III.- El o los terceros interesados, que serán todos aquellos que se consideren afectados por la acción de Extinción de Dominio y acrediten tener un interés jurídico sobre los bienes materia de la acción de Extinción de Dominio.

El demandado y los terceros interesados actuarán por sí o a través de sus representantes o apoderados, en los términos de la Ley.

CAPÍTULO VI DEL PROCEDIMIENTO

ARTÍCULO 31. La Acción de Extinción de Dominio se formulará mediante demanda del Agente del Ministerio Público, que deberá contener los siguientes requisitos:

I.- El Juez ante quien promueve;

II.- Los nombres y domicilios del demandado, los afectados, víctimas y testigos en los hechos que originan la acción, en caso de contar con esos datos;

III.- La identificación de los bienes sobre los que se ejercita la acción. En caso de mezcla de bienes, la Extinción de Dominio se solicitará sobre el total de la misma;

IV.- Los razonamientos y pruebas con los que se acredite la existencia de alguno o algunos de los hechos constitutivos de delito de los mencionados en el Artículo 5 de esta Ley y que los bienes sobre los que ejercita la acción, son de los mencionados en el Artículo 6 de este ordenamiento;

V.- Los fundamentos de derecho;

VI.- La solicitud, en su caso, de medidas cautelares sobre los bienes materia de la acción;

VII.- La solicitud de notificar al demandado y a los afectados, determinados e indeterminados;

VIII.- La petición para que se declare en la sentencia correspondiente la Extinción de Dominio de los bienes;

IX.- En su caso, el acta en la que conste el inventario y su estado físico, la constancia de inscripción en los Registros Públicos que correspondan y el certificado de gravamen de los inmuebles, así como la estimación del valor de los bienes y la documentación relativa a la notificación del procedimiento para la declaratoria de abandono y la manifestación que al respecto haya hecho el interesado o su representante legal; y

X.- Las demás que se consideren necesarias para el cumplimiento del objeto de esta Ley.

ARTÍCULO 32. Una vez presentada la demanda con los documentos que acrediten la procedencia de la acción y demás pruebas que ofrezca, el Juez contará con un plazo de tres días hábiles para resolver sobre su admisión, considerando si se encuentra acreditado alguno de los eventos típicos de los señalados en el artículo 5 de esta Ley y que los bienes sobre los que se ejercita la acción son de los enlistados en el artículo 6 de este ordenamiento, en atención al ejercicio de la acción formulada por el Agente del Ministerio Público; y si se cumplen los demás requisitos previstos en el artículo 26 de esta Ley.

Si la demanda fuere obscura o irregular, el Juez prevendrá por escrito a la parte actora para que subsane las irregularidades de que se trate, las que señalará con toda precisión en el mismo auto. En la prevención el juzgador no podrá, bajo ningún motivo, referirse a los elementos que funden la acción ni a hechos que no hayan sido expresados en la demanda, otorgándole para tal efecto un plazo de tres días contados a partir de que surta efectos la notificación del auto que lo ordene.

En caso de que el promovente no desahogue la prevención dentro del plazo señalado, el juzgador desechará la demanda y ordenará devolver al interesado todos los documentos originales y copias que haya exhibido, con excepción de la demanda que deberá conservarse en el expediente.

Si el juzgador estima que las deficiencias de la demanda no se podrán subsanar mediante la prevención, desechará la demanda en los plazos indicados en el párrafo anterior.

En ambos casos girará atento oficio al Procurador General de Justicia del Estado, acompañando el auto de desechamiento, mediante el cual dé a conocer las circunstancias.

Artículo 33. Se considerará que la acción es improcedente cuando:

I. No se encuentre acreditado el hecho constitutivo de delito, en los delitos a que se refiere el artículo 5 de la Ley;

II. Los bienes objeto de la denuncia, no se encuentran dentro de los enlistados en el Artículos 6 de la Ley; o

III. Se trate de bienes que fueron decomisados mediante sentencia ejecutoriada dictada por la autoridad judicial, en procesos del orden penal.

Cualquiera que sea la resolución que se adopte en el procedimiento penal, así como en los juicios de Amparo por actos reclamados dentro del procedimiento penal, no serán vinculantes respecto de las resoluciones que se dicten en el procedimiento de Extinción de Dominio.

Artículo 34. El Juez acordará, en el auto que admita la acción:

I. La admisión de las pruebas ofrecidas;

II. Los bienes materia del juicio;

III. Lo relativo a las medidas cautelares que le solicite;

IV. La orden de emplazar a las partes mediante notificación personal;

V. La orden de publicar el auto admisorio en Periódico Oficial del Estado de Zacatecas, en términos de lo previsto en el artículo 53 de esta Ley;

VI. El término de diez días hábiles contados a partir del siguiente a la notificación, para comparecer por escrito, por sí o a través de representante legal, y manifestar lo que a su derecho convenga y ofrecer las pruebas que considere acrediten su dicho; apercibiéndoles que de no comparecer y no ofrecer pruebas en el término concedido, precluirá su derecho para hacerlo; y

VII. Las demás determinaciones que considere pertinentes.

El notificador tendrá un término improrrogable de tres días hábiles para practicar las notificaciones personales.

ARTÍCULO 35. Todo tercer afectado que considere tener interés jurídico sobre los bienes materia de la acción de Extinción de Dominio, deberá comparecer dentro de los diez días hábiles contados a partir de aquél en que haya surtido efectos la notificación, a efecto de acreditar su interés jurídico. El Juez resolverá en un plazo de tres días hábiles, contados a partir de la comparecencia, sobre la acreditación respectiva y, en su caso, autorizará el conocimiento sobre el contenido de la demanda en las oficinas del juzgado.

Dentro de los diez días hábiles posteriores a la notificación del auto señalado en el párrafo anterior, el afectado podrá imponerse de los autos y deberá contestar la demanda.

El escrito de contestación de demanda deberá contener las excepciones y defensas del demandado o de los afectados, que se tramitarán sin suspensión del procedimiento, así como el ofrecimiento de las pruebas, debiendo aportar las que estén a su disposición. De no ofrecer las pruebas o no solicitar al Juez su auxilio para tal efecto, precluirá su derecho.

ARTÍCULO 36. Si el demandado y los afectados no contestan la demanda en el término establecido en esta Ley, se entenderá que consienten los hechos y pedimentos expuestos por el Agente del Ministerio Público.

Si el dueño, quien se ostente o conduzca como tal, aceptare la pretensión ministerial, el Juez dará vista al Agente del Ministerio Público para que dentro de tres días manifieste lo que a su derecho convenga. En estos casos, el Juez resolverá de acuerdo a las proposiciones que se le hagan y conforme a la legislación aplicable.

ARTÍCULO 37. Las pruebas que ofrezca el afectado deberán ser conducentes para acreditar:

I. La no existencia del hecho ilícito

II. La procedencia lícita de los bienes sobre los que se ejercitó la acción, su actuación de buena fe, así como que estaba impedido para conocer la utilización ilícita de dichos bienes; y

III. Que los bienes no se encuentran en ninguno de los supuestos previstos en el artículo 6 de la presente ley.

Los terceros ofrecerán pruebas conducentes para que se reconozcan sus derechos sobre los bienes materia de la acción; y las víctimas o ofendidos únicamente en lo relativo a la reparación del daño.

Las pruebas que ofrezca el Agente del Ministerio Público deberán ser conducentes, primordialmente, para acreditar la existencia de cualquiera de los eventos típicos, desde el inicio de la averiguación previa para la admisión de la acción por el Juez, y de los hechos ilícitos señalados en el artículo 5 de la Ley y que los bienes son de los enlistados en el artículo 6 del mismo ordenamiento, para el dictado de la sentencia. Además, el Juez le dará vista con todas las determinaciones que tome, para que manifieste lo que conforme a derecho proceda, con relación a los terceros, víctimas u ofendidos; y estará legitimado para recurrir cualquier determinación que tome.

ARTÍCULO 38. Si las partes, excepto el Agente del Ministerio Público, no tuvieran a su disposición los documentos que acrediten su defensa o lo que a

su derecho convenga, designarán el archivo o lugar en que se encuentren los originales, y la acreditación de haberlos solicitado para que, a su costa, se mande expedir copia de ellos.

Se entiende que las partes tienen a su disposición los documentos, siempre que legítimamente puedan pedir copia autorizada de los originales.

ARTÍCULO 39. El derecho a ofrecer pruebas le asiste también al Agente del Ministerio Público, quien contará con el término de diez días hábiles, contados a partir del siguiente a la notificación, para ofrecer pruebas diversas a las ofrecidas en su escrito inicial. En su caso, se dará vista a las partes mediante notificación personal, por un término de cinco días a fin de que manifiesten lo que a su interés corresponda.

ARTÍCULO 40. Concluidos los términos para que comparezcan las partes, el juez dictará auto, en un término de tres días hábiles, donde acordará lo relativo a:

- I. La admisión de las pruebas que le hayan ofrecido;
- II. La fecha de la audiencia de desahogo de pruebas y formulación de alegatos; que se celebrará dentro de los quince días hábiles siguientes; y
- III. Las demás determinaciones que considere pertinentes.

La audiencia se celebrará estén o no presentes las partes, excepto el Ministerio Público, así como los peritos o testigos cuya presentación quedará a cargo de la parte que los ofrezca. La falta de asistencia de los peritos o testigos que el Juez haya citado para la audiencia, tampoco impedirá su celebración; pero se impondrá a los faltistas debidamente notificados una multa de hasta cien días de salario mínimo vigente.

De no ser posible por la hora o por cuestiones procesales, el Juez suspenderá la audiencia y citará para su continuación dentro de los tres días hábiles siguientes.

ARTÍCULO 41. Concluida la etapa de la audiencia de desahogo de pruebas, se abrirá la de formulación de alegatos, que podrán ser verbales o por escrito, en el primer supuesto se observarán las siguientes reglas:

- I. El secretario leerá las constancias de autos que solicite la parte que esté en uso de la palabra;
- II. Alegará primero el Agente del Ministerio Público, y a continuación las demás partes que comparezcan;

III. Se concederá el uso de la palabra por dos veces a cada una de las partes, quienes podrán alegar tanto sobre la cuestión de fondo como sobre las circunstancias que se hayan presentado en el procedimiento;

IV. En los casos en que el afectado esté representado por varios abogados, sólo hablará uno de ellos en cada tiempo que le corresponda;

V. En sus alegatos, procurarán las partes la mayor brevedad y concisión; y

VI. No se podrá usar la palabra por más de media hora cada vez; a excepción que el Juez permita mayor tiempo porque el alegato lo amerite, pero se observará la más completa equidad entre las partes.

ARTÍCULO 42. Terminada la audiencia, el Juez declarará mediante acuerdo el cierre de la instrucción, visto el procedimiento y citará para sentencia dentro del término de quince días hábiles, que podrá duplicarse cuando el expediente exceda de más de dos mil fojas.

CAPÍTULO VII DE LAS PRUEBAS

ARTÍCULO 43. Se admitirán todos los medios de prueba que señale el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Zacatecas.

Tratándose de la prueba pericial, si hubiere discrepancia entre los dictámenes, se nombrará perito tercero preferentemente de los que disponga el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas.

La testimonial, pericial y confesional se desahogarán con la presencia ineludible del Juez.

ARTÍCULO 44. Los documentos que versen sobre los derechos reales o personales que se cuestionan sobre los bienes, deberán ser analizados detenidamente por el Juez a fin de determinar el origen y transmisión de los mismos.

ARTÍCULO 45. En caso de que ofrezca constancias de la investigación por alguno de los delitos a que se refiere el artículo 5 de esta Ley, deberá solicitarlas por conducto del Juez.

El Juez se cerciorará de que las constancias de la investigación del delito ofrecidas por el demandado o tercero afectado tengan relación con los hechos materia de la acción de Extinción de Dominio y verificará que su exhibición no ponga en riesgo la secrecía de la investigación. En todo caso, el Juez escuchará al Ministerio Público y podrá realizar personalmente inspección ocular de la averiguación previa, para determinar las constancias que habrán de agregarse al procedimiento de Extinción de Dominio.

El Juez ordenará que las constancias de la investigación del delito que admita como prueba sean debidamente resguardadas para preservar su secrecía.

CAPÍTULO VIII DE LA SENTENCIA

ARTÍCULO 46. Las sentencias que se pronuncien respecto de los bienes enumerados en las fracciones I, II y IV del Artículo 6 de la Ley, son eminentemente declarativas, en apego a lo dispuesto por el Artículo 50 de la Ley.

ARTÍCULO 47. La sentencia de Extinción de Dominio será conforme a la letra y a la interpretación jurídica, estricta y literal de la Ley, y a falta de ésta se fundará en los principios generales de derecho y en la jurisprudencia, debiendo contener el lugar y fecha en que se pronuncie, el juzgado que la dicte, un extracto claro y sucinto de las cuestiones planteadas y de las pruebas rendidas, así como la fundamentación y motivación, y terminará resolviendo con toda precisión y congruencia los puntos sujetos a la consideración del juzgado competente.

ARTÍCULO 48. La sentencia se ocupará exclusivamente de la acción, excepciones y defensas que hayan sido materia del procedimiento.

Cuando hayan sido varios los bienes en Extinción de Dominio, se hará, con la debida separación, la declaración correspondiente a cada uno de ellos.

ARTÍCULO 49. El juez, al dictar la sentencia, determinará procedente la Extinción de Dominio de los bienes materia del procedimiento cuando:

I. Se haya acreditado la existencia del hecho ilícito, por el que el Agente del Ministerio Público ejercitó la acción, de los señalados en el Artículo 5 de esta Ley;

II. Se haya probado que son de los señalados en el Artículo 6 de la Ley; y

III. El afectado no haya probado la procedencia lícita de dichos bienes, su actuación de buena fe, así como que estaba impedido para conocer su utilización ilícita.

En caso contrario, ordenará la devolución de los bienes respecto de los cuales el afectado hubiere probado la procedencia legítima de dichos bienes y los derechos que sobre ellos detente.

La sentencia que determine la Extinción de Dominio también surte efectos para los acreedores prendarios o hipotecarios, o de cualquier otro tipo de garantía prevista en la ley, de los bienes materia del procedimiento, en atención a la ilicitud de su adquisición. Con excepción de las garantías constituidas ante una

institución del sistema financiero legalmente reconocida y de acuerdo con la legislación vigente.

La sentencia también resolverá, entre otras determinaciones, lo relativo a los derechos preferentes, únicamente los alimenticios y laborales de los terceros, así como la reparación del daño para las víctimas u ofendidos, que hayan comparecido en el procedimiento.

Cuando hubiere condena de frutos, intereses, daños o perjuicios, y en los supuestos de los dos párrafos anteriores, el Juez fijará su importe en cantidad líquida o por valor equivalente en especie, y se ordenará el remate de los bienes para su cumplimiento, pero se permitirá que el Gobierno del Estado de Zacatecas pueda optar por pagar a los terceros, víctimas u ofendidos para conservar la propiedad de los bienes.

ARTÍCULO 50. La Extinción de Dominio procede con independencia del momento de adquisición o destino ilícito de los bienes sobre los que se ejercitó la acción. En todos los casos se entenderá que la adquisición ilícita de los bienes no constituye justo título.

ARTÍCULO 51. En ningún caso el juez podrá aplazar, dilatar, omitir ni negar la resolución de las cuestiones que hayan sido discutidas en el juicio.

ARTÍCULO 52. Excepcionalmente, cuando para declarar la Extinción de Dominio el Juez requiera pronunciarse conjuntamente con otras cuestiones que no hubieren sido sometidas a su resolución, lo hará saber al Agente del Ministerio Público para que amplíe la acción a las cuestiones no propuestas, siguiendo las reglas previstas en esta ley para los trámites del procedimiento. La resolución que ordene la ampliación es apelable y se admitirá, en su caso, en ambos efectos.

ARTÍCULO 53. Los gastos que se generen con el trámite de la acción, así como los que se presenten por la administración de los bienes, se pagarán con cargo a los rendimientos financieros de los bienes que se pusieron a su disposición para su administración. Los administradores deberán rendir cuentas.

ARTÍCULO 54. Si luego de concluido el procedimiento de Extinción de Dominio mediante sentencia firme, se supiere de la existencia de otros bienes propiedad del condenado se iniciará nuevo proceso de extinción del dominio respecto de los bienes restantes.

ARTICULO 55. En la sentencia pronunciada respecto de los bienes señalados en la fracción III del Artículo 6 de la Ley, el Juez podrá decretar la Extinción de Dominio del 10% al 50% de la propiedad del bien o bienes en los que recae la Extinción de Dominio, cuando el dueño haya actuado con culpa leve o culpa media, y del 50% al 100% de la propiedad del bien o bienes en los que recae la

Extinción de Dominio cuando haya actuado con culpa grave o negligencia inexcusable.

Para los efectos de este artículo se entiende que hay culpa grave o negligencia inexcusable del dueño cuando:

- a) La contraprestación por el uso del bien es notoriamente alto respecto al uso en el mercado.
- b) La contraprestación haya sido pagada en efectivo sin cumplir las disposiciones fiscales y las formalidades legales.
- c) Cuando se paga en efectivo y por adelantado por más de un año.
- d) Cuando haya fama publica que el autor del delito que da origen a la Extinción de Dominio se dedica a actividades ilícitas o que el lugar en el que se encuentra el bien de que se trate, o el mismo bien se utiliza para ello, así como cuando sea evidente la utilización del bien para tal efecto.
- e) Cuando no se cumplan las medidas preventivas de que hayan sido acordadas entre el Gobierno del Estado y un grupo o asociación de prestadores de servicios o las Cámaras de Industria o Comercio, conforme a un programa de autorregulación en los términos del Título V de esta Ley.

Para fijar el porcentaje correspondiente de la propiedad del bien o bienes en los que recae la Extinción de Dominio, el Juez deberá valorar prudentemente lo siguiente:

- I. La calidad de la persona del dueño, respecto de si es persona física o persona moral. En el caso de las personas físicas, las circunstancias socioeconómicas, y su nivel de estudios;
- II. Modalidades de la contratación verbal o expresa.
- III. El monto del beneficio, lucro y daño causado; el tiempo transcurrido entre la comisión del hecho ilícito y el acto jurídico que lo relaciona y número de copropietarios, en su caso;
- IV. Si se trata de bienes muebles, inmuebles o ambos, así como su cantidad,
- V. Gravedad del hecho ilícito;
- VI. Número de víctimas u ofendidos;
- VII. Las excepciones, defensas y pruebas ofrecidas en el juicio.
- VIII. Las medidas preventivas que haya llevado a cabo para evitar la utilización del bien de que se trate y si cumplió. o lo hizo parcialmente, con las responsabilidades establecidas en un programa de prevención.

ARTICULO 56. En la aplicación del artículo anterior, cuando sea decretado un porcentaje correspondiente de la propiedad del bien o bienes en los que recae la Extinción de Dominio y este no sea el 100%, el dueño podrá liberar el bien de la Extinción de Dominio a que fue condenado mediante el pago del importe de dicho porcentaje.

Tratándose de bienes inmuebles se tomará en cuenta el valor registrado en la Dirección de Catastro y Registro Público del Estado y en su defecto de acuerdo al artículo 451 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Zacatecas.

Tratándose de bienes muebles se estará a lo declarado por la parte actora en su escrito de demanda respecto a la fracción IX del artículo 31 de la Ley y en su defecto de acuerdo al artículo 452 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Zacatecas.

En caso contrario, el bien de que se trate será puesto a remate en un término no mayor de 45 días hábiles, contados a partir de la fecha en que causo ejecutoria la sentencia, con apego a lo dispuesto en el Capítulo Séptimo del Título Cuarto del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Zacatecas. Con el producto del remate mencionado se liquidará al dueño del bien, en la proporción que le corresponda de acuerdo a la sentencia, dejando constancia de ello en el expediente respectivo.

ARTÍCULO 57. El Juez ordenará la ejecución de la sentencia una vez que cause ejecutoria.

Los bienes sobre los que sea declarada la Extinción de Dominio o el producto de la enajenación de los mismos, serán adjudicados al Gobierno del Estado. En caso de las acciones, partes sociales o cualquier título que represente una parte alícuota del capital social o patrimonio de la sociedad o asociación de que se trate, no se considerará a esta como entidad paraestatal.

En caso de que al momento de ejecutar la sentencia los bienes asegurados hubieren sido consumidos o extintos por el dueño o por quien se ostente o se conduzca como tal, el Juez ordenará el embargo de bienes por valor equivalente en los términos del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Zacatecas, y la sustitución de éstos por los bienes respecto de los que hizo la declaratoria.

El Estado no podrá disponer de los bienes, aún y cuando haya sido decretada la Extinción de Dominio, cuando en alguna causa penal se haya ordenado la conservación de éstos por sus efectos probatorios.

Cuando haya contradicción entre dos o más sentencias, prevalecerá la sentencia que se dicte en el procedimiento de Extinción de Dominio.

Para el caso de que exista una sentencia en alguna causa ajena a la de Extinción de Dominio, que determine la devolución de los bienes o el pago de

daños y perjuicios o cualquier otro resarcimiento que no haya sido notificada al Estado, no se podrá ejecutar aquella hasta en tanto se resuelva sobre la medida cautelar en el juicio de Extinción de Dominio.

CAPITULO IX DE LAS NOTIFICACIONES

ARTÍCULO 58. Deberán notificarse personalmente:

- I. La admisión del ejercicio de la acción al demandado o a los demandados;
- II. Cuando se deje de actuar durante más de ciento ochenta días naturales, por cualquier motivo;
- III. Cuando el Juez estime que se trata de un caso urgente y así lo ordene expresamente;
- IV. Las sentencias definitivas

Las demás notificaciones se realizarán a través del boletín Judicial.

ARTÍCULO 60. En todos los casos que se admita el ejercicio de la acción, el Juez mandará publicar el auto respectivo por tres veces, de tres en tres días, debiendo mediar entre cada publicación dos días hábiles, en el Periódico Oficial del Estado de Zacatecas y el Boletín Judicial del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, así como en un diario de circulación nacional, cuyo gasto correrá a cargo de la Procuraduría General de Justicia del Estado, para que comparezcan las personas que se consideren afectados, terceros, víctimas u ofendidos a manifestar lo que a su derecho convenga.

Cuando los bienes materia del procedimiento de Extinción de Dominio sean inmuebles, la cédula de notificación se fijará, además, en cada uno de éstos.

ARTÍCULO 61. Cuando se trate de la notificación personal al afectado por la admisión del ejercicio de la acción, la cédula deberá contener copia íntegra del auto de admisión.

ARTÍCULO 62. Las notificaciones deberán seguir las formalidades establecidas en el Capítulo IV del Título Cuarto del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Zacatecas.

ARTÍCULO 63. Bastará la manifestación del Agente del Ministerio Público de que se desconoce el domicilio de las personas a notificar personalmente, situación que acreditará con los informes de investigación respectivos, para que se ordene a través de edictos.

CAPITULO X

DE LAS NULIDADES

ARTÍCULO 64. La nulidad de las actuaciones procederá únicamente por la ausencia o defecto en la notificación.

CAPITULO XI DE LOS INCIDENTES Y RECURSOS

ARTÍCULO 65. Los incidentes no suspenden el procedimiento y todas las excepciones que se opongan se resolverán en la sentencia definitiva.

ARTÍCULO 66. Procede el recurso de revocación contra los autos que dicte el juez en el procedimiento, con excepción de los que esta Ley expresamente señale que procede el recurso de apelación.

Previa vista que le dé a las partes con el recurso de revocación, por el término de dos días hábiles, el Juez resolverá el recurso en un término de dos días hábiles.

ARTÍCULO 67. En contra de la sentencia que ponga fin al juicio, procede el recurso de apelación que se admitirá en ambos efectos.

Contra el acuerdo que rechace medios de prueba ofrecidos en tiempo y forma, procede el recurso de apelación que se admitirá solo en el efecto devolutivo.

ARTÍCULO 68. La revocación y la apelación se sustanciarán en los términos previstos en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Zacatecas.

CAPÍTULO XII DE LAS GARANTÍAS Y DERECHOS DE LOS AFECTADOS, TERCEROS, VÍCTIMAS Y OFENDIDOS

ARTÍCULO 69. En el procedimiento de Extinción de Dominio se respetarán las garantías de audiencia y debido proceso, permitiendo al afectado, terceros, víctimas y ofendidos, comparecer en el procedimiento, oponer las excepciones y defensas, presentar pruebas e intervenir en su preparación y desahogo, así como los demás actos procedimentales que estimen convenientes.

ARTÍCULO 70. Durante el procedimiento el Juez garantizará y protegerá que los afectados puedan probar:

I. La procedencia lícita de dichos bienes de que se trate, su actuación de buena fe, así como que estaba impedido para conocer su utilización ilícita;

II. Que los bienes materia del procedimiento no son de los señalados en el artículo 6 de esta Ley; y

III. Que respecto de los bienes sobre los que se ejercitó la acción se ha emitido una sentencia firme favorable dentro de un procedimiento de Extinción de Dominio, respecto de las mismas personas detentadoras de los derechos de propiedad de sobre los mismos.

También garantizará que los terceros ofrezcan pruebas conducentes para que se reconozcan sus derechos sobre los bienes materia de la acción; y las víctimas u ofendidos únicamente en lo relativo a la reparación del daño, cuando comparezcan para tales efectos.

ARTÍCULO 71. Cuando el afectado lo solicite por cualquier medio, el Juez le designará un defensor de oficio, quien realizará todas las diligencias para garantizar la audiencia y el debido proceso. Cuando comparezcan terceros y la víctima, en caso de requerirlo, tendrán derecho a que se les garantice defensa adecuada.

En todo caso en el que los afectados terceros, víctimas u ofendidos pertenezcan a algún grupo de la población vulnerable, tales como integrantes de las comunidades indígenas, discapacitados, tercera edad, ejidatarios y comuneros, entre otros, la defensoría de oficio les orientara en cuanto al contenido, alcance y consecuencias de esta Ley y del proceso que se siga, así como sobre las garantías y derechos que les concede, y sobre la posibilidad de ser representados por esa defensoría en el juicio, de lo que se dejará constancia en el expediente respectivo.

TITULO TERCERO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES

CAPÍTULO I DE LA ADMINISTRACIÓN DE BIENES MUEBLES

ARTÍCULO 72. Para la administración de los bienes muebles, una vez que hayan sido puestos a disposición de la Secretaría de Finanzas del Estado, se integrará una Coordinación Técnica conformada por representantes de:

- I. La Secretaría de Finanzas;
- II. La Procuraduría;
- III. La Secretaría;
- IV. La Oficialía Mayor; y
- V. La Contraloría General.

Los representantes deberán contar con nivel mínimo de Director de Área. La Coordinación será presidida por el representante de la Secretaría de Finanzas.

Funcionará conforme al Manual de Operación que expida la propia Coordinación.

ARTÍCULO 73. La Coordinación tendrá como finalidad asesorar a la Secretaría de Finanzas sobre la forma en que se administren los bienes muebles, y las demás acciones necesarias para el cumplimiento de los fines de la Ley.

La Coordinación también rendirá los informes al Juez y la Legislatura del Estado en los plazos y términos que señala la Ley.

ARTÍCULO 74. La Secretaría de Finanzas constituirá un fideicomiso público para la administración de los bienes muebles, tomando en consideración las determinaciones que tome la Coordinación.

Los integrantes de la Coordinación también conformarán el Comité Técnico del Fideicomiso, para que exista congruencia en la toma de decisiones.

ARTÍCULO 75. Cuando la sentencia que determine la Extinción de Dominio de bienes muebles cause ejecutoria, la Secretaría de Finanzas, posterior a la publicación del Acuerdo donde se determine su destino, enviará los bienes a la Oficialía Mayor para su cumplimiento.

ARTÍCULO 76. La entrega se realizará mediante acta administrativa circunstanciada, con la participación de la Contraloría General, en la que se deberá incluir copia certificada de la sentencia, el inventario de los bienes y la indicación del estado en que se encuentran.

CAPÍTULO II DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES

ARTÍCULO 77. La Dirección de Administración de la Procuraduría, respecto de los bienes inmuebles que tenga en depósito por determinación de medidas cautelares que se dicten en el procedimiento de Extinción de Dominio, tendrá las siguientes atribuciones:

I. Se auxiliará en la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, quien destinará elementos cuando se requiera, para la guarda, custodia y resguardo de los bienes, hasta en tanto se dicte sentencia y la misma cause ejecutoria;

II. Realizará una inspección física de los bienes de que se trate;

III. Realizará las acciones necesarias para su mantenimiento y conservación;

IV. Rendirá cuentas al Juez y al Agente del Ministerio Público que ejerció la acción de Extinción de Dominio, respecto de la administración de los bienes, consistente únicamente en los gastos que se eroguen por su conservación;

V. Rendirá un informe anual al Procurador y este a su vez al Congreso del Estado sobre los bienes que se encuentren en depósito;

VI. Denunciará ante el Ministerio Público, hechos que pudieran constituir delitos y que afectaran al bien depositado.

ARTÍCULO 78. Las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades que reciban bienes muebles o inmuebles, con motivo de la Ley, procederán a registrarlos e inventariarlos en términos de la normativa vigente.

ARTÍCULO 79. Cuando se dicte sentencia donde se determine que no es procedente la acción de Extinción de Dominio intentada, y la misma cause ejecutoria, el Agente del Ministerio Público informará a la Dirección de Administración de la Procuraduría y, para que se realice la entrega del bien al propietario o su apoderado legal, elaborando el acta administrativa circunstanciada correspondiente en la que deberá participar además el Órgano Interno de Control de la Procuraduría.

TÍTULO CUARTO

CAPÍTULO ÚNICO DE LA COLABORACIÓN

ARTÍCULO 80. El Juez que conozca de un procedimiento de Extinción de Dominio, de oficio o a petición del Agente del Ministerio Público, en términos del Artículo 17 de esta Ley, podrá requerir información o documentos del sistema financiero por conducto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas o la Comisión Nacional del Sistema de ahorro para el Retiro, así como información financiera o fiscal al Sistema de Administración Tributaria y demás entidades públicas o privadas, que puedan servir para la sustanciación del procedimiento. El Juez y el Agente del Ministerio Público deberán guardar la más estricta confidencialidad sobre la información y documentos que se obtengan con fundamento en este artículo.

ARTÍCULO 81. Cuando los bienes motivo de la acción se encuentren en una entidad federativa, o el extranjero, se utilizarán los exhortos, la vía de asistencia jurídica internacional, los demás instrumentos legales que establezcan el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Zacatecas, la legislación vigente, los tratados e instrumentos internacionales o, en su defecto la reciprocidad internacional, para la ejecución de las medidas cautelares y la sentencia.

TÍTULO QUINTO DE LA PREVENCIÓN DEL USO ILÍCITO DE LOS BIENES.

CAPÍTULO ÚNICO.

ARTÍCULO 82. El Gobierno del Estado deberá informar a los ciudadanos, a través de sus dependencias, instituciones, notarios, inmobiliarias, periódico oficial y todos los organismos que estén relacionados con la venta, renta o transmisión de derechos propiedad o posesión de bienes muebles e inmuebles que puedan ser susceptibles de la aplicación de la presente ley, de las consecuencias y previsiones al momento de la celebración de cualquier acto jurídico.

ARTICULO 83. La Procuraduría desarrollará un programa de difusión permanente del contenido y efectos de la presente Ley con la finalidad de que la población esté en posibilidad de tomar las medidas de prevención del uso ilícito de los bienes para proteger los derechos que tengan sobre los mismos.

En este programa de difusión se integraran manuales instructivos y procedimientos para que la población pueda llevar a cabo las medidas de prevención y verificación que resulten recomendables para los efectos señalados en este artículo.

Este programa de difusión deberá poner énfasis para los destinatarios integrantes de grupos vulnerables de la comunidad tales como comunidades indígenas, discapacitados, tercera edad, ejidatarios y comuneros y demás que regulen las legislaciones

ARTICULO 84. Las agrupaciones o asociaciones por industria o giro de actividad de personas físicas o personas morales podrán generar una autorregulación de medidas de prevención contra el uso ilícito de los bienes de su propiedad.

La Procuraduría promoverá la existencia de esta autorregulación de medidas de prevención.

Los integrantes de las agrupaciones o asociaciones a los que se refiere este artículo que observen íntegramente las medidas de prevención aprobadas de acuerdo con los procedimientos societarios internos para ello, cuyos bienes hayan sido objeto de la presente Ley tendrán derecho a que el Juez lo considere así al dictar la sentencia al efectuar su ponderación respecto de la culpa para la determinación del porcentaje correspondiente de la propiedad del bien o bienes en los que recae la Extinción de Dominio.

Las agrupaciones o asociaciones a las que se refiere este artículo podrán convenir con la Procuraduría, que el producto de la autorregulación de medidas de prevención sea validado por esta Institución, siempre que permita la verificación de la autoridad respecto del cumplimiento del programa de autorregulación y que en esta verificación participe la comunidad.

Los integrantes de las agrupaciones o asociaciones a los que se refiere este artículo que observen íntegramente las medidas de prevención aprobadas de acuerdo con los procedimientos societarios internos para ello, cuyos bienes

hayan sido objeto de la presente Ley tendrán derecho a que el Juez lo considere así al dictar la sentencia al efectuar su ponderación respecto de la culpa para la determinación del porcentaje correspondiente de la propiedad del bien o bienes en los que recae la Extinción de Dominio.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforman la fracción V del artículo 4, fracciones I, II, IV y V del artículo 18 y se adiciona el artículo 36 Bis., todos de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Zacatecas, para quedar como sigue:

Artículo 4. Integración

El Poder Judicial del Estado de Zacatecas se ejerce por:

I. ...

IV. ...

V. Los Juzgados de Primera Instancia, que podrán ser Civiles, Penales, Familiares Mixtos de Garantías, de Extinción de Dominio, de Juicio Oral para Adultos, Especializados para Adolescentes y de Ejecución de Sanciones; y

VI. ...

Artículo 18. Competencia de las Salas Civiles

I. De los recursos de apelación que se interpongan contra las resoluciones dictadas por los jueces de Primera Instancia y Municipales, en los asuntos civiles, familiares, mercantiles y de extinción de dominio, contra resoluciones de los jueces de Primera Instancia y Municipales;

II. De los recursos de queja que se hagan valer en asuntos civiles, familiares, mercantiles y de extinción de dominio, contra resoluciones de los jueces de Primera Instancia y Municipales;

III. ...

IV. De los impedimentos, excusas y recusaciones de los jueces de Primera Instancia y Municipal en los asuntos de orden civil, familiar, mercantil y de extinción de dominio;

V. De los conflictos que sobre competencia se susciten entre los jueces de Primera Instancia, los jueces Municipales o entre éstos y aquéllos, cuando se trate de materia civil, familiar, mercantil o extinción de dominio;

VI. ...

VII. ...

Artículo 36 Bis. Competencia de los Jueces de Primera Instancia en materia de extinción de dominio

Los jueces de lo familiar conocerán de las cuestiones que les correspondan de conformidad con la Ley de Extinción de Dominio del Estado de Zacatecas y Ley Contra la Delincuencia Organizada.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS:

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado.

ARTÍCULO SEGUNDO.- En términos de la fracción I del artículo 3, se aplicará supletoriamente el Código de Procedimientos Penales en los tiempos y formas señalados en el Artículo Primero Transitorio del Código Procesal Penal para el Estado de Zacatecas.

ARTÍCULO TERCERO.- El Gobernador del Estado de Zacatecas cuenta con 90 días naturales posteriores a la publicación del presente decreto para realizar las adecuaciones jurídico – administrativas necesarias para el adecuado funcionamiento del presente ordenamiento.

ARTÍCULO CUARTO.- El Procurador General de Justicia cuenta con 90 días naturales posteriores a la publicación del presente decreto para realizar las adecuaciones jurídico – administrativas necesarias para el adecuado funcionamiento del presente ordenamiento.

ARTÍCULO QUINTO.- El Poder Judicial del Estado de Zacatecas realizará la reasignación de la materia del conocimiento de cualquiera de los Juzgados que lo integran y que sean necesarios para contar con los Juzgados Especializados en Extinción de Dominio para substanciar los procedimientos en esta materia.

ARTÍCULO SEXTO.- Hasta en tanto el Poder Judicial del Estado de Zacatecas realiza las adecuaciones jurídico – administrativas para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo anterior, conocerán de los procesos de Extinción de Dominio los Juzgados Civiles con sede en la capital del Estado.

ARTÍCULO SÉPTIMO.- Se derogan todas las disposiciones que contravengan este Decreto.

Zacatecas, Zacatecas; a trece de septiembre del dos mil diez.